EL BLOQUEO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LA VANGUARDIA, Editorial, 26.10.07

HACE unas pocas semanas advertíamos desde esta columna editorial sobre el grave peligro que se cierne sobre la credibilidad del Tribunal Constitucional (TC) al haberlo convertido en el escenario donde se juegan los intereses políticos de los partidos. Decíamos que el más alto tribunal del Estado no puede ni debe ser perversamente manipulado por aspiraciones políticas, por legítimas que éstas sean, porque el riesgo de que sus decisiones se vean desacreditadas es enorme. Y mucho nos tememos que el daño que se le ha inflingido sea poco menos que irreversible.

El último episodio de una cadena de decisiones desafortunadas en torno al TC ha sido el anuncio del Partido Popular de que prepara la recusación de tres de sus magistrados "por las mismas razones por las que el Gobierno recusó a dos de ellos la pasada semana", según dijo el portavoz del partido conservador, Eduardo Zaplana. Estas tres recusaciones más las cuatro realizadas hasta ahora dejarían al TC en tan sólo cinco magistrados hábiles, lo que lo inutiliza prácticamente para tomar decisiones de calado puesto que el quórum está en siete.

La historia de este bloqueo viene de lejos. Empezó con la recusación por parte del PP del magistrado Pérez Tremps, por haber elaborado un estudio sobre el Estatut antes de acceder al Alto Tribunal. Una decisión muy polémica, porque alteraba la composición del Tribunal, lo que podía dar un giro al arbitraje sobre importantes leyes recusadas. A aquella recusación le siguió la reforma por parte del gobierno de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que convertía en ley la costumbre largamente

practicada de prorrogar los mandatos de la presidencia en casos determinados. Este artículo fue recusado por el Partido Popular para evitar el voto de calidad de la presidenta Maria Emilia Casas, lo que fue aceptado por la mayoría del Tribunal con el voto de calidad del magistrado de más edad, de ideología conservadora. Esta estrategia fue contestada por el Gobierno con la recusación de dos magistrados que ha sido ahora contrarrestada con la recusación de otros tres por el PP.

Todo ello viene a confirmar la extrema judicialización de la política en esta legislatura. Leyes tan fundamentales para el futuro del Estado y de España como son el Estatut de Catalunya, o las leyes de igualdad, de matrimonios homosexuales, del suelo o la de Ordenación Universitaria están recurridas por el PP ante el Alto Tribunal y esperan una decisión cuya trascendencia jurídico-política no escapa a nadie.

Existe la sensación de que el TC se ha convertido en una tercera cámara parlamentaria, donde se disputan las decisiones que la aritmética democrática ha superado en el Congreso y en el Senado. De ser así, el Alto Tribunal tendría un papel que no sólo no le corresponde constitucionalmente, sino que les convertiría en una grave anomalía jurídica y, por tanto, democrática. Estamos ante una grave irresponsabilidad.